

MAYO 16 DE 1900

3ª REUNION — 5ª SESION ORDINARIA

PRESIDENCIA DEL SEÑOR MARCO AVELLANEDA

DIPUTADOS PRESENTES: Alvarez, Argerich, Astrada, Avellaneda (F. E.), Avellaneda (M.), Avellaneda (M. M.), Barraquero, Barraza, Barroetaveña, Belderrain, Benedit, Bermejo, Bertrés, Berrondo, Billorea, Bollini, Bosch, Calderón, Carbó, Carlés, Carrasco, Castellanos (A.), Castellanos (J.), Centeno, Claros, Colina, Coronado, Dantas, Demaría, Ezquer, Falcón, Ferrari, Fonrouge, Gálvez, García, Garzón, Gigena, Godoy (E.), Godoy (M. E.), González, Gouchon, Helguera, Hernández, Loeuvera, Lagos, Lartigue, Lilledal, Loureyro, Luro, Machado, Martínez, Massey, Morel, Olivera, Outes, Palacios, Pando, Parera (F. M.), Parera (R.), Peña, Quintana, Ramos Mejía, Reyes, Roberts, Romero, Rosas, Ruiz, Sáenz, Salas, Santa Coloma, Sarmiento, Serna, Serú, Tissera, Torres, Ugarriza, Ugarte, Usandivaras, Valenzuela, Videla, Villanueva, Yofre, Zavalla; AUSENTE CON LICENCIA: Capdevila, Torino; CON AVISO: Alfonso, Bouquet, Roldán, Carreras, Cullen, Echegaray, Iriondo (U.), Lacasa, Leiva, Moreno, Roberts, Sánchez, Seguí; SIN AVISO: Añábaraz, Balestra, Balaguer, Bares, Bruchman, Cantón, Casares, Gómez (C. F.), Gómez (M.), Iriondo (M.), Laferrère, Lassaga, Loveyra, Olmos, Pando, Rivas, Santamarina, Silva, Soldati, Varela Ortiz, Vedia, Vivanco.

SUMARIO

1.—Acta.

2.—Asuntos entrados:

I.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo reformando el régimen de la instrucción secundaria.

II.—Comunicaciones del Honorable Senado.

III.—Peticiones particulares.

IV.—Proyecto de ley del señor diputado García sobre creación de una Caja de ahorros para la formación de fondos destinados a pensiones de empleados civiles.

V.—Petición particular.

VI.—Proyecto de ley del señor diputado Hernández sobre intervención federal en la provincia de Entre Ríos.

3.—Moción del señor diputado Carbó, aprobada, sobre pronto despacho por la Comisión de Negocios Constitucionales del proyecto de ley de intervención federal en la provincia de Entre Ríos.

4.—Se consideran y aprueban los siguientes despachos de la Comisión de Negocios Constitucionales acordando permisos para aceptar condecoraciones:

I.—A los señores Carlos Pellegrini, Lorenzo M. Irigaray, Juan Bay y Alberto Moreno.

II.—Al teniente general Nicolás Levalle.

III.—Al capitán de fragata Darío Saráchaga.

IV.—Al señor Belisario P. Quiroga.

V.—„ „ Vicente J. Domínguez.

—En Buenos Aires, a 16 de Mayo de 1900, reunidos en su sala de sesiones los señores diputados arriba mencionados, el señor presidente declara abierta la sesión, siendo las 3 y 20 p. m.

1

ACTA

—Se lee y aprueba el acta de la sesión anterior.

Art. 79.— Los institutos prácticos a que se refiere la presente ley, deberán pasar a la jurisdicción provincial, con todos sus cargos y beneficios, a la terminación de dos cursos totales de estudios, debiendo entenderse en todo caso, que el gobierno de la Nación contribuirá con el 20 % del presupuesto de cada instituto transferido, en el carácter establecido en el artículo 49.

Verificada la transferencia, los institutos sólo quedan sometidos, respecto del gobierno nacional, a las condiciones del artículo 39.

Art. 80.— Quedan exceptuadas de las disposiciones del artículo anterior, las provincias a que se refiere el artículo 60.

Art. 90.— Autorízase al Poder Ejecutivo para instituir de los fondos de que trata el artículo 26, becas de cincuenta pesos en favor de los actuales alumnos de los colegios nacionales substituidos por la presente ley, a los efectos de la continuación de sus estudios, toda vez que obtuvieren la clasificación media anual de sobresaliente o distinguido.

Dichos alumnos se hallarán sometidos en un todo a las disposiciones generales sobre becas.

Art. 10.— Las provincias que deseen fundar escuelas normales de maestros, gozarán desde su funcionamiento de una subvención correspondiente al 20 % del presupuesto de la escuela, bajo las condiciones establecidas en el artículo 39 de la presente ley.

Art. 11.— Comuníquese al Poder Ejecutivo.

O. Magnasco.

—A la Comisión de Instrucción Pública.

II

Comunicaciones del Honorable Senado

• SANCIONES DEFINITIVAS:

—En el proyecto de ley que designa el parque 3 de Febrero para la colocación del monumento erigido a la memoria del doctor Germán Burmeister. *(Al archivo).*

—En el proyecto de ley que deroga la ley 1.628, acordando premios en tierras a los militares que tomaron parte en la expedición al Río Negro. — *(Al archivo).*

SANCIONES EN REVISION:

19— Autorización al Poder Ejecutivo para

pagar a doña Rosa Berro de Craviotto, la suma de 32.377 pesos moneda nacional, por expropiación de terrenos para ensanche del Riachuelo. *(A la Comisión Auxiliar de Presupuesto).*

20— Crédito suplementario al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, por pesos 5.656 moneda nacional, para el pago de cuentas atrasadas. *(A la Comisión Auxiliar de Presupuesto).*

21— Adquisición de un telescopio para el observatorio de Córdoba. *(A la Comisión Auxiliar de Presupuesto).*

III

Peticiones particulares

Los señores Agostini y Searcela solicitan prórroga para la presentación de los estudios definitivos del proyecto de puerto en la bahía de Samborombón. *(A la Comisión de Obras Públicas).*

— Margarita L. de Peralta reitera su pedido de pensión. *(A la Comisión de Peticiones).*

— El expráctico mayor de la armada don Juan B. González, solicita permiso para residir en el extranjero. *(A la Comisión de Peticiones).*

— La señora Rosa Paz de Rebollo, hija del brigadier general don José María Paz, pide el pronto despacho de su solicitud sobre concesión de tierras. *(A la Comisión de Tierras Públicas).*

— Casilda Moreno solicita pensión. *(A la Comisión de Guerra).*

— Honorio Lara solicita el pago de haberes. *(A la Comisión de Guerra).*

— Felisa del Busto de Arzac solicita pensión. *(A la Comisión de Guerra).*

IV

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

CAPITULO I

Caja de Ahorros y sus recursos

Artículo 1º — Créase una caja para la formación y administración de fondos destina-

dos a pensiones de empleados civiles, con sujeción a las reglas que a continuación se establecen, la cual se denominará Caja de Ahorros de Empleados Civiles.

Art. 2º — Los recursos que la formarán serán los siguientes:

- 1º El descuento de un 5 % que se hará a todos los empleados civiles de la Nación, de sus respectivos sueldos;
- 2º La economía que resulte del tiempo que se hallen vacantes algunos de los establecidos en el presupuesto, siempre que el trabajo del empleado a que corresponda, se verifique por los de las mismas oficinas;
- 3º Las multas por inasistencia no justificada, que deberán imponer los jefes de oficina, con arreglo a las disposiciones que dictará el Poder Ejecutivo;
- 4º La diferencia de sueldo de un mes, entre el que goza el empleado ascendido y el que le corresponda en virtud del ascenso;
- 5º El 25 % del valor de todo comiso o multa, que se declaren o apliquen por los funcionarios civiles, de acuerdo con las leyes y disposiciones vigentes;
- 6º El fondo existente en la caja, perteneciente al empleado que fuera destituido por dolo o fraude de los intereses fiscales, debidamente comprobados;
- 7º El fondo existe en la caja, perteneciente al empleado que deje voluntariamente el servicio antes de los 10 años de la fecha en que se ponga en vigencia esta ley;
- 8º Los beneficios que produzca la inversión de los fondos de la caja, como lo establece el artículo 4º;
- 9º Los beneficios que correspondan a un empleado contribuyente de la caja fallecido sin herederos forzosos;
10. El 1 % de las rentas generales que se destinen a dicho objeto;
11. El descuento de 4 % de las pensiones que se paguen conforme a esta ley;
12. El descuento o reserva del 5 % que se hará de los beneficios que se distribuirán entre los empleados contribuyentes, según el artículo 23.

Art. 3º — El Poder Ejecutivo dictará las medidas necesarias para que la tesorería y de-

más oficinas pagadoras hagan los descuentos y entreguen mensualmente a la Caja de Ahorros los fondos fijos mencionados en el artículo anterior; y los eventuales, inmediatamente que se perciban.

Art. 4º — Los fondos de la Caja de Ahorros serán empleados:

- 1º En descuento de letras de tesorería;
- 2º En títulos de renta pública;
- 3º En adquisición de expedientes liquidados a cargo del tesoro nacional;
- 4º En adelanto de fondos sobre los mismos;
- 5º En préstamos a empleados, reembolsables por quinta parte de sus sueldos; y
- 6º La existencia en efectivo será siempre colocada en depósito a premio en el Banco de la Nación.

Art. 5º — El máximo de premio o beneficio que cobrará la Caja será:

- 1º Por la adquisición de los créditos liquidados, un diez por ciento sobre su valor efectivo;
- 2º Por los adelantos sobre los mismos, dos por ciento mensual; y
- 3º Por los préstamos a empleados, el mayor interés que cobren los bancos en la Capital.

Estos préstamos no podrán exceder jamás de la suma equivalente a cuatro mensualidades del sueldo que, según el presupuesto, goce el empleado entonces.

Art. 6º — Los créditos de la Caja de Ahorros contra el empleado, por préstamos que le hiciere, tendrán prelación sobre los de cualquier particular.

Art. 7º — Los fondos de la Caja de Ahorros quedan exentos de todo secuestro y deberán destinarse exclusivamente a los objetos determinados por esta ley.

Todo funcionario que ordene o les dé otra inversión, será personalmente responsable de su valor e intereses.

CAPITULO II

Administración de la Caja de Ahorros

Art. 8º — La Caja de Ahorros será administrada por un directorio, compuesto de

un administrador general que lo presidirá, de un contador y un tesorero, bajo la dependencia del Ministerio de Hacienda.

Dichos empleados serán nombrados por el Poder Ejecutivo y gozarán del sueldo que les asigna el presupuesto.

El directorio se renovará cada año por terceras partes, pudiendo ser reelegidos sus miembros.

Art. 9º — Además de los libros que requiera la administración general de la Caja, se llevará uno especial de cuentas corrientes, en que se abrirá la que corresponda a cada empleado contribuyente, a cuyo haber se acreditarán las cantidades recibidas por el descuento del cinco por ciento de sus respectivos sueldos, cargándose en el debe lo que adeudase a la Caja de Ahorros por cualquier causa.

Art. 10. — Anualmente se formará un balance general de la Caja de Ahorros, y cada trienio otro especial de los beneficios que deberán distribuirse entre los empleados contribuyentes según lo determina el artículo 23. Esos balances, con el conforme del inspector ad hoc que nombre el Poder Ejecutivo y aprobación del Ministerio de Hacienda, se publicarán por la prensa.

Art. 11. — La Caja de Ahorros hará sus pagos mensuales y trienales a los pensionistas y empleados contribuyentes, previas sus liquidaciones correspondientes visadas por contaduría general y aprobadas por el Ministerio de Hacienda.

Art. 12. — El Poder Ejecutivo determinará el régimen de la administración de esa oficina, simplificándola en todo lo posible y proveerá los medios de vigilancia e inspección conveniente para el control de todas las operaciones y procedimientos.

CAPITULO III

De la aplicación de los fondos

Art. 13. — Todos los empleados civiles de la Nación que hubiesen contribuido con sus erogaciones a la formación de la Caja de Ahorros, con sujeción a esta ley, tendrán derecho, en los casos y condiciones que ella establece al goce de una pensión por jubilación y de una parte proporcional de los beneficios o utilidades que reporte la Caja

de Ahorros, o a pensión para su familia en caso de muerte.

Estas pensiones no excederán jamás de la mitad del sueldo que gozase el empleado al tiempo de su jubilación o fallecimiento.

Art. 14. — Para adquirir pensión por jubilación, se requiere que el empleado contribuyente reuna las condiciones siguientes:

- 1º Tener sesenta años de edad y 30 o más años de servicio efectivo continuado; o
- 2º Hallarse imposibilitado por enfermedades físicas adquiridas por causa del servicio, y haber servido en empleos civiles por lo menos 20 años.

Art. 15. — Estas pensiones se acordarán en las siguientes proporciones: 1º por 20 años de servicio, según queda establecido, la cuarta parte del sueldo de empleado; 2º por 30 años, la tercera parte del sueldo; y 3º, por 40 años, la mitad del sueldo.

Art. 16 — Para que las familias de los empleados gocen de pensión por muerte de éstos, se requieren todas las siguientes condiciones:

- 1º Servicios continuados del causante durante 20 años por lo menos;
- 2º Que su fallecimiento ocurra hallándose en el desempeño de su empleo;
- 3º Que no haya dejado de contribuir con sus cuotas para el fondo de la Caja de Ahorros;
- 4º Legitimidad del matrimonio o de la filiación en su caso; y
- 5º Residencia en la República, de la familia pensionista.

Art. 17. — De estas pensiones gozarán solamente las viudas mientras no pasen a segundas nupcias, las hijas hasta la edad de 20 años, mientras se conserven solteras, y los hijos varones hasta la edad de 20 años, siempre que ejerzan algún arte u oficio, u otra ocupación honesta, salvo que sean física o moralmente inútiles.

Por cualquier causa que expire el derecho de pensión para uno o más miembros de la familia, sus partes se acumularán en los restantes.

Art. 18. — No es permitida la acumulación de dos o más pensiones en una misma persona,

y el interesado deberá optar a una de ellas, quedando por este hecho extinguido el derecho a las demás.

Art. 19. — Las pensiones para las familias de los empleados fallecidos, se acordarán en esta proporción:

- 1º Por veinte años de servicios, la cuarta parte del sueldo;
- 2º Por treinta años, la tercera parte; y
- 3º Por cuarenta años, la mitad del sueldo.

Art. 20. — Toda pensión o jubilación es personal e intransferible, fuera de los casos establecidos por esta ley, y será nula toda cesión, transferencia o enajenación que se hiciere de ellas, por cualquier causa que fuese.

Art. 21. — Los acreedores de una pensionista tendrán derecho a demandar la cuarta parte de la pensión durante el tiempo que la pereiban y sólo será retenida esa parte por resolución de juez competente.

Art. 22. — El derecho a pensión o jubilación se pierde:

- 1º Por renuncia voluntaria del empleo;
- 2º Por destitución del empleado;
- 3º Por condenación o pena infamante pronunciada por juez competente;
- 4º Por domiciliarse voluntariamente en país extranjero;
- 5º Por vida deshonesto; y
- 6º Por vagancia voluntaria.

Art. 23. — Cada tres años se hará una liquidación especial de los beneficios que proporcionalmente correspondan al capital formado por los recursos mencionados en los incisos 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 2º, y la suma que de ellos resulte se distribuirá a prorrata, según su respectivo capital, constituido por el cinco por ciento, descontado de sus sueldos. Esa distribución se hará, siendo previamente aprobada la liquidación por el ministro de Hacienda (artículos 9º y 10º).

Art. 24. — El empleado contribuyente que renunciase voluntariamente a su puesto, después de diez años de servicios continuados, tendrá derecho a que se le liquide la cuenta que se le hubiese formado con sujeción a lo dispuesto por el artículo 9º, y a que se le abone el saldo de su capital, descontándole lo que adeudara a la Caja por préstamos u otra causa.

Art. 25. — El crédito del empleado contra la Caja de Ahorros, es personal: no puede ser transferido a terceros y es nula toda enajenación que se hiciere de ese crédito, bajo cualquier forma o título que se verificase.

CAPITULO IV

Disposiciones generales

Art. 26. — La Caja de Ahorros no reconocerá, ni pagará pensión o jubilación alguna, mientras ellas no sean acordadas por el Poder Ejecutivo, conforme a esta ley, previos los trámites que él establezca para su ejecución.

Art. 27. — Los comprobantes con que debe justificarse el derecho para optar a pensión o jubilación, serán los mismos que se requieren por las leyes comunes para justificarse los demás derechos individuales.

Art. 28. — Los plazos y términos para los efectos de esta ley, deben computarse desde la época en que ella empiece a tener ejecución, lo que se hará constar por un decreto del Poder Ejecutivo, y los sueldos del presupuesto vigente de esta época, servirán de base para fijar las cuotas de las pensiones y jubilaciones.

Art. 29. — Sólo gozarán de los beneficios que esta ley acuerda, los empleados que contribuyan con sus erogaciones a la formación del fondo de la Caja de Ahorros.

Art. 30. — Autorízase al Poder Ejecutivo para reglamentar la ejecución de esta ley y para hacer los gastos que para ello se requieran, debiendo disponer lo conveniente para que empiece a producir sus efectos desde el 1º de Enero de 1901.

Art. 31. — Quedan derogadas las leyes anteriores en cuanto se opongan a la presente.

Art. 32. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Tecófilo García.

Sr. García. — Pido la palabra.

Es tal la convicción que hay respecto de la imperiosa necesidad de establecer una ley que reglamente las pensiones y jubilaciones, en una palabra, que establezca un verdadero montepío civil para asegurar a los empleados su porvenir, que no me parece necesario aducir muchas consideraciones a este respecto para fundar el proyecto, y voy a enumerar simplemente los principales

puntos que abarca para que la Honorable Cámara pueda formarse una idea de él.

Se establece una Caja de Ahorros, creándose los recursos con que debe ella ser dotada, estableciéndose el empleo que ha de darse a esos recursos, para hacerlos producir, prescribiéndose la administración que debe tener esa institución, la que estará a cargo de un directorio compuesto de tres empleados nombrados por el Poder Ejecutivo y que tendrán un carácter autónomo, puede decirse, en el desempeño de sus funciones. Se establece luego la aplicación que debe darse a esos recursos y las reglas a que deben sujetarse para dotar las pensiones y jubilaciones, en las épocas y términos que el mismo proyecto establece.

En una palabra, contiene el armazón, diré así, de una oficina que ha de correr completamente con todo lo que se relaciona con las pensiones y jubilaciones de los empleados civiles.

No es un proyecto nuevo el que traigo a la Cámara; es un proyecto que tuvo el honor de presentar en las sesiones del año 1881 y que, como muchos otros, caducó al vencimiento del plazo establecido para ello, y pasó al archivo.

Como ahora se suscita generalmente la conveniencia de resolver de una vez lo que conviene respecto al establecimiento de un montepío civil, he creído que sería oportuno que este proyecto pasara también a la comisión, para que estudiando los pensamientos diversos que reúnen los otros que ya hay presentados y cualquier otro que se presente en lo sucesivo, pueda formular uno que llene cumplidamente todas las necesidades a que responde una institución de esta naturaleza.

Es con este objeto que, molestando la atención de la Honorable Cámara, repito este proyecto, y pido a mis honorables colegas se sirvan apoyarlo, para que pase a la comisión respectiva.

—Apoyado.

Sr. Presidente. — A la Comisión de Legislación.

V

Petición particular

Sr. Secretario (Ovando). — Se ha recibido una nota subscripta por vecinos de Entre Ríos, solicitando que el Poder Ejecutivo intervenga aquella provincia.

Sr. Hernández. — Pido la palabra. Rogaré al señor presidente que hiciera leer esa solicitud.

—Se lee:

Paraná, Mayo de 1900.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Los que subscriben, vecinos de la provincia de Entre Ríos, usando del derecho de petición, ante vuestra honorabilidad en la mejor forma exponemos:

Que el bienestar político y económico de la provincia sufre desde mucho tiempo profundas perturbaciones por la ausencia de un régimen gubernamental encauzado en la norma de las instituciones; por lo que corresponde y pedimos al Honorable Congreso de la Nación ejercite o facultades que la Carta Fundamental le acuerda sancionando la intervención amplia para esta provincia a fin de hacer cesar la anarquía institucional que la desquicia, y pueda ella volver al goce de los beneficios del sistema republicano.

I

Impera en Entre Ríos desde la administración anterior el gobierno de familia, el nepotismo que refracta por sí solo el espíritu liberal de nuestras leyes; y esto, que implica un privilegio políticosocial, se ha consagrado como sistema.

Para suprimir todo control en el manejo de la cosa pública se erigió violentamente la unanimidad legislativa, llegándose hasta la expulsión del único diputado desafecto a la oligarquía. El vicegobernador de entonces no era miembro de la familia y fué expulsado inconstitucionalmente, quedando en su lugar uno perteneciente a ella. A la misma pertenecen las personas que han estado y siguen al frente de las oficinas y puestos de control y responsabilidad.